

RESOLUCIÓN

--- Ciudad de México, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. -----

--- Visto para resolver el procedimiento administrativo disciplinario CI/SUD/D/141/2015, instruido en contra de la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, con puesto de Soporte Administrativo "C", adscrita al Hospital General Ticoman de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, con Registro Federal de Contribuyentes XXXXXX, por incumplimiento a obligaciones inherentes a su cargo como servidor público; y, -----

RESULTANDO

1.- Promoción de Responsabilidad Administrativa. Que mediante oficio CG/CISERSALUD/CCG/440/2015 de fecha uno de diciembre del dos mil quince, suscrito por el Maestro Luis Carlos Arroyo Robles, Contralor Interno en Servicios de Salud Pública, se informa de la servidora pública hoy incoada que omitió presentar su Declaración de Intereses. Foja 001 del presente expediente. -----

2.- Acuerdo de Inicio De Procedimiento. Que con fecha cinco de febrero del dos mil dieciséis, se dictó acuerdo de inicio de procedimiento administrativo disciplinario en el que se ordenó citar a la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, como probable responsable de los hechos materia del presente, a efecto que compareciera al desahogo de la audiencia prevista en el artículo 64 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (foja 24 a 27 de autos), formalidad que se cumplió mediante el oficio citatorio CG/CISERSALUD/JUDQD/240/2016 del cinco de febrero del dos mil dieciséis, notificado personalmente mediante la cédula correspondiente el día once del mismo mes y año (fojas 28 a 32) del expediente en que se actúa. -----

3.- Trámite del procedimiento administrativo disciplinario. Con fecha veintidos de febrero del dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de ley a que se refiere el artículo 64 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a la que compareció la ciudadana por su propio derecho, en la cual presentó su declaración de manera verbal, a través del cual ofreció pruebas y alegó lo que a su derecho convino (fojas 035 a 036 del presente sumario). -----

4.- Turno para resolución. Que por corresponder al estado procesal de los autos del expediente que nos ocupa, se turnaron los mismos a la vista del suscrito para dictar la resolución que en derecho corresponde. -----

--- Por lo expuesto es de considerarse; y -----

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Contraloría Interna en el Organismo Público Descentralizado denominado "Servicios de Salud Pública del Distrito Federal", es competente para conocer, investigar, desahogar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108 párrafo primero, 109 fracción III y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2;

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

3 fracción IV; 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57 párrafo segundo, 60, 62, 64, 65, 66, 68, 91 y 92, párrafo segundo, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 1, 15 fracción XV, 16, 17 y 34 fracción XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, 7, fracción XIV, numeral 8, 113 fracciones X y XXIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; en relación con el artículo 25 fracción IX, del Estatuto Orgánico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de octubre de dos mil siete, así como del artículo 11, del Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, denominado Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el tres de julio de mil novecientos noventa y siete. -----

--- SEGUNDO. FIJACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA AL SERVIDOR PÚBLICO. Por razón de método, se procede a fijar la conducta irregular que le fue atribuida a la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** y la cual será materia de estudio en la presente resolución. Resulta ilustrativa la tesis I.7º.A.672 A que fuera publicada en la página 1638 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009. -----

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LA CONDUCTA ATRIBUIDA EN EL CITATORIO PARA LA AUDIENCIA DE LEY A QUE ALUDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO PUEDE SER MODIFICADA EN LA RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO. *La fracción I del artículo 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos prevé la garantía de audiencia, conforme a la cual todo gobernado tiene derecho frente a las autoridades administrativas y judiciales a que se le otorgue oportunidad de defensa por medio del ofrecimiento de pruebas y formulación de alegatos en los casos en que pueda verse afectada su esfera jurídica. Así, la autoridad en el procedimiento administrativo de responsabilidades debe salvaguardar las formalidades esenciales del procedimiento, permitiendo al incoado recabar y preparar las pruebas y alegatos necesarios para su defensa, con el fin de desvirtuar la actuación que al instruirse el citado procedimiento se le imputa. En esas condiciones, la conducta atribuida al servidor público en el citatorio para la audiencia de ley a que alude la señalada fracción I, no puede ser modificada en la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo disciplinario, para sancionarlo por una diversa, porque al hacerlo se soslayarían las indicadas formalidades, en tanto que no se brindaría al particular la oportunidad de defensa, al no existir un vínculo entre el proceder atribuido al iniciar el procedimiento, que es el que lo motivó, y el reprochado en la determinación con que concluye, por lo que, en todo caso, al advertir elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto responsable, la autoridad está facultada para ordenar la práctica de investigaciones y citarlo para otra audiencia, a efecto de juzgarlo con respecto a la nueva conducta irregular advertida, de conformidad con la fracción III del invocado precepto.*

--- En ese sentido, una vez señalada de manera presuntiva la conducta respectiva a la incoada en el inicio del procedimiento que nos ocupa, ésta no puede modificarse en el sentido de atribuirle una diversa en la presente resolución, por lo que la conducta que se le atribuye a la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** se hizo consistir básicamente en: -----

--- La ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** presentó su Declaración de Intereses el día primero de septiembre del dos mil quince, de acuerdo a lo señalado en el oficio **CG/DGAJR/DSP/26/2016 de fecha seis de enero de dos mil dieciséis**, signado por el licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal, así como, la copia simple del acuse de recibo electrónico de la Declaración de Intereses de la hoy incoada de fecha

primero de septiembre de dos mil quince, es decir después del treinta y uno de agosto de dos mil quince, en presunta contravención de la obligación que deriva de los “LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN”, emitidos por el Contralor General del Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintitrés de julio de dos mil quince, en relación al “ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES”, emitido por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de mayo de dos mil quince, como a continuación se argumentará. -----

--- Considerando que el puesto que ostenta la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, Soporte Administrativo “C”, **adscrita al área de Hospital General de Ticomán**, de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a lo establecido en el artículo 47 fracción XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el LINEAMIENTO PRIMERO y el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de los “LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN”, emitido por el Contralor General del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintitrés de julio de dos mil quince, en el que se establece que la presentación de la declaración de intereses deberá practicarse durante el mes de agosto del año dos mil quince; en relación a la política QUINTA del “ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES”, emitido por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de mayo de dos mil quince. Lo anterior, toda vez que la servidora pública que nos ocupa **presentó** su Declaración de Intereses correspondiente al año dos mil quince **el día primero de septiembre de dos mil quince**, de acuerdo a lo señalado en el oficio **CG/DGAJR/DSP/26/2016 de fecha seis de enero de dos mil dieciséis**, signado por el licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal, así como, la copia simple del acuse de recibo electrónico de la Declaración de Intereses del hoy incoado de fecha primero de septiembre de dos mil quince; **es decir después del mes de agosto de ese año, por lo que se presume resulta extemporánea.** -----

--- **TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ELEMENTOS MATERIA DE ESTUDIO.** Con la finalidad de resolver si la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** es responsable de la falta que se le imputa, esta autoridad procede al análisis de los siguientes elementos: -----

1. Que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, se desempeñaba como servidora pública en la época de los hechos denunciados como irregulares. -----

2. La existencia de la conducta atribuida a la servidora pública, que con dicha conducta haya violentado el marco normativo que resulta aplicable y que ello constituya una violación a alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

3. La plena responsabilidad administrativa de la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, en el incumplimiento a algunas de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- CUARTO. DEMOSTRACIÓN DE LA CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO DURANTE LA ÉPOCA DE LOS HECHOS. Por lo que hace al primero de los elementos precisados en el considerando anterior, en autos quedó debidamente demostrado que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, sí tiene la calidad de servidora pública al momento en que aconteció la irregularidad administrativa que se le atribuye al desempeñarse como Soporte Administrativo "C"; conclusión a la que llega este Resolutor de la valoración conjunta de las siguientes pruebas: -----

a) Copia certificada del oficio CRH/9723/2015, de fecha dos de septiembre del dos mil quince, a través del cual el Contador Público Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de Servicios de Salud Pública informó a esta Contraloría Interna que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** ocupa un puesto de Soporte Administrativo "C" adscrita a al Hospital General Ticoman, dentro de dicho Organismo Público Descentralizado. Fojas 10 y 11 de la presente resolución. -----

b) Copia certificada de la Constancia Global de Personal Eventual de fecha nueve de julio del mismo año, lote JGL2215, correspondiente a la quincena 22/15, vigencia del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, la cual se encuentra signada por el Director de Administración y Finanzas, el Coordinador de Recursos Humanos y el Subdirector de Movimientos de Personal. Foja 020 de autos. -----

--- Documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en términos del artículo 45 de este último ordenamiento. -----

--- Desprendiéndose de las documentales mencionadas que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** se desempeña con el puesto de Soporte Administrativo "C", de acuerdo a la segunda documental con una vigencia del uno de julio a treinta y uno de diciembre del dos mil quince. -----

--- Robustece lo anterior lo manifestado por la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, en el escrito de fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, presentado durante el desahogo de la audiencia de responsabilidades a su cargo verificada el veintidós de febrero de dos mil dieciséis (fojas 038 a 046 de autos); en donde expresó lo siguiente: -----

" ...

Es menester dejar claro, además de ser hechos notorios que el nivel que ostentó y ostenté en la época de los hechos cuestionados, es decir, soporte Administrativo C, adscrita al área del Hospital General de Ticomán de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal,... (sic)

--- Declaración que es valorada en calidad de indicio en términos de los artículos 285, 286, y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, supletorio en términos del diverso 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ello, por tratarse de manifestaciones unilaterales de la indiciada. -----

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

--- Cuya apreciación concatenada con las documentales anteriormente mencionadas, permite concluir que efectivamente la ciudadana EMILIA BAUTISTA DE JESÚS; reconoció expresamente que en el tiempo de los hechos que se le imputan desempeñó las funciones de Soporte Administrativo "C" adscrita al Hospital General de Ticomán dependiente de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. -----

--- **QUINTO. EXISTENCIA DE LA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA.** Una vez que quedó plenamente acreditada la calidad de servidora pública de la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**; se procede al estudio del segundo de los supuestos mencionados en el Considerando TERCERO, consistente en determinar la existencia de la conducta atribuida a la servidora pública, que con dicha conducta haya violentado el marco normativo que resulta aplicable y que ello constituya el incumplimiento a alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- En ese orden de ideas, a efecto de determinar la existencia de la responsabilidad administrativa atribuida a la servidora pública con motivo de la conducta que se le imputa se hace necesario establecer, primeramente, si la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** al desempeñarse como Soporte Administrativo "C" adscrita al Hospital General de Ticomán dependiente de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, estaba obligada a declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos; lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico (**Declaración de Intereses**) en el mes de agosto de 2015; conforme a la Política Quinta en correlación con la Política Octava y artículo Tercero Transitorio del *ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES* publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; y numeral Segundo Transitorio de los *LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN*, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de julio de 2015. -----

--- En el expediente en que se actúa obran los siguientes medios de prueba: -----

1) Oficio número **CG/CISERSALUD/CCG/440/2015** de uno de diciembre de dos mil quince, signado por el maestro Luis Carlos Arroyo Robles Contralor Interno en los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a través del cual hace de conocimiento que al servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, con puesto de Soporte Administrativo "C" adscrita al área de Hospital General de Ticomán, de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, presentó su Declaración de Intereses el día primero de septiembre de dos mil quince, es decir después del treinta y uno de agosto de dos mil quince. Visible a Foja 01. -----

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

--- Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- Probanza de la que se desprende que el Contralor Interno en Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, hizo del conocimiento a la Jefatura de Unidad Departamental de Quejas y Denuncias que se presumía que la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** omitió presentar Declaración de Intereses. -----

2. Copia simple del Acuse de recibo electrónico de la Declaración de Intereses de la hoy incoada de fecha primero de septiembre de dos mil quince. Foja 9. -----

--- Documental pública a la que se le otorga valor probatorio de indicio de conformidad en lo dispuesto en los artículos 285, 286 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; probanza de la que se desprende que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, presentó su Declaración de Intereses el primero de septiembre de dos mil quince, es decir, después del mes de agosto del mismo año, esto es de manera extemporánea. -----

3. Copia certificada del oficio CRH/9723/2015 de dos de septiembre de dos mil quince, signado por el C.P. Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, por medio del cual remite listado de servidores públicos de la Entidad obligados a presentar Declaración de Intereses en el año dos mil quince, y en el que se aprecia el nombre de la hoy incoada, puesto, tipo de contratación así como el sueldo mensual neto. Fojas 10 y 11. -----

--- Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- Probanza de la que se desprende que la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, cuenta con un puesto de Soporte Administrativo C, siendo un personal Eventual, con un sueldo mensual neto de 11,956.83 (once mil novecientos cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.). -----

4. Copia certificada de la impresión de la consulta realizada en la página electrónica oficial de la Oficialía Mayor del Distrito Federal. Foja 14. -----

--- Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que se trata de una documental signada por un servidor público en ejercicio de sus funciones. -----

--- Probanza de la que se desprende la consulta realizada por este Órgano Interno de Control el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, a los sueldos publicados por la Oficialía Mayor en su página electrónica oficial, a través de la liga <http://www.om.df.gob.mx/>, ícono "nómina del Gobierno del Distrito Federal" en donde se encuentra un apartado denominado Remuneraciones al personal del Gobierno del Distrito Federal, Sueldo Mensual Bruto y Neto por Puesto, del Sector Central; en la que se visualiza que el puesto de estructura en la Administración Pública del Distrito Federal, denominado "Enlace" en su nivel más bajo, eso es, Enlace "A" tiene un sueldo mensual neto de \$10,755.92 (diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.). -----



5. Copia certificada del oficio **CG/DGAJR/DSP/26/2016 de seis de enero de dos mil dieciséis**, signado por el licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal, mediante el cual informa que de la búsqueda realizada en el Sistema de Declaración de Intereses se obtuvo registro de que la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, presentó su Declaración de Intereses correspondiente al año dos mil quince, el día primero de septiembre del año dos mil quince. Foja 16. -----

--- Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- Probanza de la que se desprende la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** presentó su Declaración de Intereses el primero de septiembre de dos mil quince, es decir, después del mes de agosto del mismo año, de forma extemporánea. -----

6. Copia certificada de la Constancia Global de Personal Eventual, de la quincena 22/15 de la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, remitida por el C.P. Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, mediante el oficio CRH/14523/2015 de veintiocho de diciembre de dos mil quince. Foja 22.-----

--- Documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad en lo dispuesto en los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- Probanza de la que se desprende que del uno de julio al treinta de septiembre del dos mil quince la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, se encontraba adscrita al Hospital General Ticoman de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal con un puesto de Soporte Administrativo "C". -----

--- Así se tiene que la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, quien en el momento de los hechos ocupaba un puesto de **Soporte Administrativo "C" adscrita al área de Hospital General de Ticomán**, de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, incumplió a lo establecido en el artículo 47 fracciones XXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el LINEAMIENTO PRIMERO y el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de los "LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN", emitido por el Contralor General del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintitrés de julio de dos mil quince, en el que se establece que la presentación de la declaración de intereses deberá practicarse durante el mes de agosto del año dos mil quince; en relación a la política QUINTA del "ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES", emitido por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de mayo de dos mil quince. Lo anterior, toda vez que la servidora pública que nos ocupa **presentó su Declaración de Intereses correspondiente al año dos mil quince el día primero de septiembre de dos mil quince**, de acuerdo a lo señalado en el oficio **CG/DGAJR/DSP/26/2016 de fecha seis de enero de dos mil dieciséis**, signado por el licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal, así como, la copia simple del acuse de recibo electrónico de la Declaración de Intereses del hoy incoado de fecha primero de septiembre de dos mil quince; **es decir después del mes de agosto de ese año, por lo que resulta extemporánea.** -----

--- No es óbice para tener acreditada la plena responsabilidad administrativa en la irregularidad que se atribuye a la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, los argumentos de defensa que hace valer en la Audiencia de Ley de fecha veintidós de febrero del presente año, los cuales esta autoridad si bien está obligado a su análisis no está obligada a su transcripción. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, misma que se lee bajo el siguiente rubro. -----

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo XV de las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.

--- En la Audiencia de Ley referida, el servidor público **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, dentro de su escrito de defensa medularmente manifestó: -----

"...

1. ANTECEDENTES

Es menester dejar claro, además de ser hechos notorios que el nivel que ostentó y ostenté en la época de los hechos cuestionados, es decir, soporte Administrativo C, adscrita al área del Hospital General de Ticomán de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, no tenía como funciones o atribuciones originarias, ya sea por delegación, comisión o por representación las siguientes:

A) Conocer, autorizar, aceptar, evaluar y desechar propuestas, emitir fallos y en general cualquier toma de decisiones relacionadas con licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres proveedores y adjudicación directa; así como para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos inherentes a la ejecución y cumplimiento de los mismos, como son la rescisión, terminación, suspensión, sanción, aplicación de penas, garantías y demás actos relacionados con adquisición y arrendamiento de bienes muebles, la contratación de prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de prestación de servicios profesionales con personas físicas, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas federales y del Distrito Federal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.

B) Conocer, autorizar, aceptar, evaluar y desechar propuestas, emitir fallos y en general cualquier toma de decisiones relacionadas con licitaciones públicas, invitaciones restringidas a cuando menos tres contratistas y adjudicación directa; así como para suscribir convenios, contratos y demás actos jurídicos inherentes a la ejecución y cumplimiento de los mismos, como son la rescisión, terminación, suspensión,



EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

sanción, aplicación de penas, garantías y demás actos relacionados con la obra pública y servicios relacionados con la misma, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas federales y del Distrito Federal en materia de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas.

C) Conocer, autorizar, contratar, aceptar, evaluar y desechar propuestas, conceder, otorgar y en general cualquier toma de decisiones relacionadas con las adquisiciones, asignaciones, desincorporaciones, enajenaciones, concesiones, permisos, permutas, donaciones, expropiaciones de bienes inmuebles y cualquier acto jurídico que incida en los bienes inmuebles propiedad o en posesión del Distrito Federal; enajenación, uso, destino y aprovechamiento de bienes muebles y derechos patrimonio o a cargo del Distrito Federal; concesión de servicios públicos o; Contratos de Prestación de Servicios a Largo Plazo o Proyectos de Coinversión relacionados con bienes patrimonio del Distrito Federal o servicios públicos a cargo de éste; Convenios de actuación por cooperación en materia de Desarrollo Urbano; y demás tipos de asociación público-privada similares, en términos de las disposiciones jurídicas y administrativas federales y del Distrito. Federal en materia de Régimen Patrimonial y del Servicio Público; Expropiación; Presupuesto y Gasto Eficiente; Fiscal; Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente y demás aplicables.

Por lo que en esa tesitura, la obligación de presentar declaración de intereses no resultaba obligatoria conforme al ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLITICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, en su cláusula Tercera.

II. PETICIÓN DE ABSTENCIÓN DE IMPOSICIÓN SANCIONADORA

De conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como a lo establecido en el criterio de jurisprudencia que resulta ilustrativo para el caso en comento, cuyo rubro texto y ubicación son:

Época: Novena Época. Registro: 188748. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Septiembre de 2001. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 2a. CLXXX/2001. Página: 716

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA RESPETA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. Al disponer el artículo 63 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que la autoridad administrativa facultada para imponer las sanciones relativas en el ámbito de su competencia, podrá abstenerse de sancionar al servidor público infractor, por una sola vez, cuando lo estime pertinente, justificando la causa de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes, circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de cien veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque del contenido del citado artículo 63 deriva que, dentro de las normas que conforman el marco jurídico impuesto a la autoridad administrativa para ejercer el arbitrio sancionador impositivo, también se encausó su actuación para abstenerse de sancionar al servidor público infractor al limitar, en la medida legislativamente establecida, el ejercicio discrecional de su atribución, de tal manera que se observan las condiciones de certeza de una situación jurídica definida, que garantiza el respeto a los señalados principios constitucionales, dentro del marco que conforma el referido sistema sancionador de los actos u omisiones de los servidores públicos que fija la ley federal relativa.



EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

Amparo en revisión 2164/99. Fernando Ignacio Martínez González. 29 de junio de 2001.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Guillermo 1. Ortiz
Mayagoitia. Secretaria: Aída García Franco.

En ese orden de ideas, amable y respetuosamente solicito el beneficio establecido en el precepto y criterio antes invocados a favor de la suscrita, toda vez que en el presente caso se cumplen y/o actualizan los supuestos normativos previstos en el artículo 63 de la Ley de la Materia, como a continuación se demuestra.

El artículo 63 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de su texto establece:

ARTÍCULO 63.- La dependencia y la Secretaría, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, justificando la causa de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de cien veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.

En ese contexto se tiene que la responsabilidad presuntamente endilgada a la suscrita, se contrae a la omisión de presentar en tiempo y forma la declaración de intereses y manifestación de no conflicto de intereses correspondiente al año 2015, la cual se realizó en forma extemporánea, es decir, un día después al plazo que tenía.

En las relatadas condiciones, las hipótesis normativas en el presente caso se actualizan en razón de lo siguiente:

- a) En el presente, la declaración de intereses y manifestación de no conflicto de intereses correspondiente al año 2015, solo se lleva al cabo una vez al año, la omisión en la presentación en tiempo y forma, excedió un día, es decir, se presentó el 1º de septiembre de 2015, siendo que el plazo que se tenía para ello, feneció el 31 de agosto de la anualidad antes citada, por lo que incumplimiento en sí, no actualiza conducta ilícita alguna, no produjo daño patrimonial, es decir, se cumple con la hipótesis a que alude el precepto antes transcrito.
- b) La presunta responsabilidad imputada, no constituye una conducta grave, dado que se está ante la falta de presentación de una declaración dentro del plazo establecido en la norma, es decir, la falta de oportunidad para realizar una obligación no constituye una conducta grave máxime que la obligación se cumplió un día posterior al plazo establecido, sin que mediará requerimiento o exhortación para que la suscrita cumpliera con la obligación endilgada.
- c) La irregularidad atribuida en el oficio citatorio, fue corregida de manera espontánea, toda vez que para que se llevará al cabo la presentación de la declaración en cuestión, no medio invitación, sugerencia o imposición por parte de un tercero o autoridad competente para ello, sino que se presentó 1 (un) día posterior al plazo que se tenía para hacerla, luego entonces, se afirma que la omisión fue corregida en forma voluntaria por la obligada. Aunado a lo anterior, los efectos que se produjeron por la falta de presentación de la declaración de intereses, se corrigieron o desaparecieron, toda vez que se proporcionó a través de la declaración la información solicitada en ésta en forma espontánea y veraz
- d) En el presente caso, los hechos que envuelve a la conducta imputada no revistan gravedad ni constituyen delito, aunado a lo anterior debe decirse que la declaración cuestionada, se instituyó por

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

primera vez en la Administración Pública del Gobierno del Distrito Federal hoy Ciudad de México, a más que en el presente caso, la suscrita no cuenta con antecedentes en la Ley de la Materia.

Por todo lo anterior, es inconcuso y/o no hay lugar a dudas de que en el presente caso, existen las condiciones para que esa Controlaría en Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, se abstenga de imponer sanción a la suscrita por la responsabilidad endilgada en el citatorio que se atiende.

III.- ALEGATOS DEFENSIVOS

ÚNICO.- Alegato de fondo que se formula, y que controvierte la imputación específica contenida en el citatorio.

Sin perjuicio de lo expresado en el punto que antecede principalmente y sin que se entienda que existe contradicción con lo que se expresará en este punto, desde este momento, me permito controvertir de manera contundente la imputación específica a que refiere el citatorio que se contesta, transcribiendo para tal efecto la parte que del mismo interesa:

“...presentó su Declaración de Intereses correspondiente al año dos mil quince, el día primero de septiembre de esa anualidad, es decir, posterior al mes de agosto, por lo que se presume que es extemporánea...”

En la forma y términos que se precisan en el oficio citatorio que se refuta, literalmente se puede concluir que en efecto, la suscrita incumplió con la obligación de presentar la declaración de intereses, **sin** embargo, la intensión de la suscrita nunca fue apartarme de la obligación en cuestionada, tan es así, que en el propio oficio citatorio para audiencia de ley, se reconoce que ésta se presentó un día después de que venció el plazo, sin que mediara invitación, sugerencia o insinuación por parte de autoridad competente, es decir, no existió en el animo de la compareciente dejar de cumplir con la obligación, sino que se trató de un error en los tiempos para cumplir con la obligación, así como el estado de vulnerabilidad en la que se encontraba, dado que no cuento con Internet propio y en mi centro de trabajo no tengo acceso internet.

Aunado a lo anterior, debe establecerse que, el bien jurídico tutelado en el ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, así como en los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, quedó subsanado o corregido, dado que la compareciente, informó con honestidad, veracidad y transparencia la situación de intereses.

En ese orden, ese juzgador, deberá tomar en consideración los elementos antes expresados y hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 63 de la Ley de la Materia y abstenerse de sancionar a la suscrita.

En esa tesitura, es evidente que el oficio citatorio para audiencia de ley, no está debidamente fundado y motivado razón por la cual dicho acto de molestia esta viciado de nulidad

IV. EXCEPCIONES Y DEFENSAS PARTICULARES QUE DERIVAN DEL OCURSO DE COMPARECENCIA

a) La que deriva de lo previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en razón de que se cumplen y/o actualizan las hipótesis normativas previstas en dicho cuerpo normativo.

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

b) La indebida apreciación de los hechos endilgado a la compareciente, los cuales a la luz de los principios contenidos en los artículos 47 y demás aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no fueron violentados, inclusive en todo caso, podría ser beneficiaria del beneficio que establece los supuestos normativos previstos en el artículo 163 de la ley de la materia. Asimismo se advierte que no tiene firma el oficio citatorio.
..." (Sic)

--- Argumentos de defensa que no hacen animo en esta resolutoria para desvirtuar la conducta imputada en el presente disciplinario, por el contrario confirma que la incoada infringió la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con relación a la política QUINTA del "ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES", emitido por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de mayo de dos mil quince, lo anterior, es así ya que la servidora pública que nos ocupa presentó su Declaración de Intereses correspondiente al año dos mil quince, el día primero de septiembre de esa anualidad, es decir, posterior al mes de agosto, por lo que se presume la misma fue extemporánea. Es decir la hoy incoada en el momento de los hechos ocupaba un puesto de Soporte Administrativo "C", el cual resulta en un cargo homólogo por ingresos o contraprestaciones al puesto de estructura en la Administración Pública del Distrito Federal, denominado "Enlace" cuyo sueldo mensual en su nivel más bajo, eso es, "Enlace A" tiene un sueldo mensual neto de \$10,755.92 (diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.); de acuerdo a los sueldos publicados por la Oficialía Mayor en su página electrónica oficial, consulta realizada por esta Interna a través de la liga <http://www.om.df.gob.mx/>; siendo el caso, que la hoy incoada de acuerdo al oficio CRH/9723/2015 de dos de septiembre de dos mil quince, signado por el C.P. Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal en el momento de los hechos tenía una percepción mensual neta de \$11,956.83 (once mil novecientos cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.). -----

--- Refiere la incoada en sus argumentos de defensa que la obligación de presentar declaración de intereses no resultaba obligatoria conforme al ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, situación planteada de forma errónea, pues en el momento de los hechos ocupaba un puesto de **Soporte Administrativo "C" adscrita al área de Hospital General de Ticomán**, de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, debía en su carácter de servidor público cumplir con el LINEAMIENTO PRIMERO y el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO de los "LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN", emitido por el Contralor General del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintitrés de julio de dos mil quince, en el que se establece que la presentación de la declaración de intereses deberá practicarse durante el mes de agosto del año dos mil quince; con relación a la política QUINTA del "ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES", emitido por el C. Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintisiete de mayo de dos mil quince. -----

Página 12



--- Por lo que se refiere a la prueba marcada con el número 2 debe señalarse, que esta prueba se trata del conjunto de actuaciones que obran en el expediente administrativo, con motivo del Disciplinario instrumentado en contra de **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** y de donde se desprenden hechos conocidos para inferir uno desconocido, pruebas que fueron admitidas y desahogadas, cumpliendo con lo previsto en el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, son admisibles estableciendo este último ordinal lo siguiente: -----

“Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo 206.- Se admitirá como prueba en los términos del artículo 20 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente, y no vaya contra el derecho, a juicio del juez o tribunal. Cuando la autoridad judicial lo estime necesario, podrá por algún otro medio de prueba, establecer su autenticidad.”

--- Ahora bien, según se aprecia de la norma preinserta, aplicada al ámbito de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, dentro del procedimiento disciplinario será admitida como prueba todo lo que así sea ofrecido, siempre y cuando a criterio de la Autoridad, el material de que se trate sea idóneo para esclarecer la verdad de los hechos y no atente contra el derecho. -----

--- Así, queda manifiesto que esta Contraloría Interna, admitió la prueba instrumental de actuaciones, es decir el cúmulo de documentales que integran el presente expediente, ofrecida por el servidor, en los términos previstos por el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, mismo que como ya se ha dicho, concede una amplísima discrecionalidad a todo órgano de control interno para tener como prueba todo aquello que sea conducente para dirimir la verdad de las cosas, respecto de los hechos irregulares de su conocimiento, siempre y cuando ese elemento convictivo no vulnere alguna disposición jurídica. -----

--- En esta tesitura, es necesario puntualizar que desde el punto de vista de la libertad o de la restricción que pudiera establecer el Legislador sobre la valoración de las pruebas aportadas en el ámbito jurisdiccional, se ha determinado doctrinalmente la existencia de tres sistemas: I. Sistema de Prueba libre; II. Sistema de la Prueba legal o tasada; y III. Sistema mixto.-----

--- En el sistema de prueba libre no hay un valor previamente establecido al que ha de sujetarse la Autoridad; por su parte, en el sistema de prueba legal o tasada, el Legislador ordinario determina previamente el valor que a cada prueba ha de concederle la Autoridad, sin que intervenga el arbitrio de este para asignarle una determinada apreciación a cada medio probatorio.-----

--- Sin embargo, el sistema mixto es un sistema ecléctico, en el que las reglas de ofrecimiento, admisión y desahogo están fijadas por el legislador, pero se da un margen de discrecionalidad a la Autoridad para su interpretación y para su aplicación pragmática. -----

--- En nuestra legislación mexicana, tratándose de la facultad de la Autoridad para la apreciación de las pruebas, se ha adoptado el sistema mixto de valoración, pues algunas están sujetas a reglas de apreciación; pero otras, como pueden ser la testimonial, la pericial y la presuncional, se dejan al prudente arbitrio de la Autoridad, arbitrio que no puede ser absoluto, sino restringido, pues esa valoración debe hacerse a través de la lógica y la razón y observar las reglas de la sana crítica, o sea, el

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

prudente arbitrio de la Autoridad, de los cuales no puede separarse pues, de hacerlo, su apreciación, aunque no infrinja la ley, si violaría los principios lógicos en que descansa. -----

--- Así, la obligación esencial que la Autoridad debe cumplir, no se realiza mediante una simple afirmación de los hechos que considera probados, sino que debe evaluar, pensar, examinar, comprobar, confirmar y demostrar que con las pruebas reunidas llega por lógica y con razonamientos a su convencimiento.-----

---Ahora bien, aplicando las anteriores reflexiones al régimen local de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y considerando además que el procedimiento disciplinario informado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es seguido en forma de un auténtico juicio, tenemos que este ordenamiento jurídico no contempla un sistema de tasación de pruebas dentro de los procedimientos administrativos disciplinarios, ello, no obstante encontrarse estatuida la institución de la prueba dentro de dicha secuela, de tal suerte que ante la deficiente regulación de este tópico dentro de la normatividad en comento resulta indispensable acudir a la legislación adjetiva supletoria. ---

--- Así, tenemos que los artículos 279 a 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria en términos del artículo 45 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, estatuye un sistema de valoración de medios de convicción que resulta aplicable *mutatis mutandis* la materia que nos ocupa, de los cuales se advierte que los principios consignados en los mismos, aplicados a la materia de responsabilidades administrativas, son en esencia los siguientes:-

- a. El Órgano de Control Interno goza de una amplia discrecionalidad para ponderar las pruebas en los procedimientos administrativos disciplinarios;-----
- b. Los documentos públicos y la inspección siempre probaran plenamente lo que a través suyo se acredite, mientras que las demás pruebas solo gozan de un mero valor indiciario;-----
- c. Para actuar la tasación de la fuerza demostrativa de los indicios, los Órganos de Control Interno, atenderá a la naturaleza de los hechos y el nexo lógico y natural más o menos necesario entre la verdad conocida y la que se pretende encontrar; y -----
- d. Es indispensable que la autoridad administrativa motive en forma exhaustiva la valoración de los medios de convicción y la decisión final que de ella resulte.-----

--- Así, lo anterior evidencia lo imprescindibles que resultan las amplias facultades con las que ha dotado el Código Federal de Procedimientos Penales a las Contralorías dentro de sus artículos 279 a 290 para resolver los asuntos administrativos sometidos a su potestad; lo que al mismo tiempo pone de relieve la gran responsabilidad que tiene a su cargo para decidir con sentido de justicia, y más aun con equidad, por ser esta la justicia de cada asunto en concreto, según las circunstancias, condiciones y eventualidades particulares, evidencias en los hechos controvertidos y justificados con los correspondientes medios de convicción después de que ha realizado una ponderación prudente ajustada al sentido común, así como al raciocinio lógico y a su experiencia, sin olvidar el buen criterio y la buena fe que deben acompañar a todo Órgano de Control Interno. -----

--- Para cumplir con esos principios, la autoridad debe apegarse a las reglas de la sana crítica que son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano, en ellas participan las reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del resolutor, y unas y otras deben de contribuir de igual manera a que el ente público pueda analizar la prueba con arreglo a la sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas. De ahí que la sana crítica debe entenderse como la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento.-----



---Por lo que, como corolario de lo anterior, se advierte que tratándose del régimen de responsabilidad administrativa vigente en el Distrito Federal, el sistema de valoración probatoria es de carácter mixto, en el cual el Legislador solo taso por disposición de ley a los documentos públicos y a la inspección (confiriéndoles plena eficacia convictiva), y dejo en manos de la Contraloría Interna decidir la valoración de los diversos medios de convicción distintos a esa clase de pruebas.-----

--- De esa guisa, la apreciación probatoria que realicen los Órganos de Control Interno respecto a estas últimas probanzas debe estar acotada por la lógica, la experiencia y la sana crítica, a fin de que la decisión de la autoridad administrativa sea una verdadera expresión de justicia, es decir, lo suficientemente poderosa para rechazar la duda y el margen de subjetividad de la autoridad, para lo cual se debe contar con la figura conocida como “las máximas de experiencia” que son las reglas de vida o verdades de sentido común que contribuyen de un modo eficaz a la formación de la persuasión judicial; de tal suerte que el órgano de vigilancia única y exclusivamente debe cumplir el requisito de motivación exigido por la normatividad estudiada con el fin de alcanzar una decisión determinada.-----

---Al respecto, cobra relevancia el criterio jurisprudencial número 22 sustentado por el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, y consultable en la página dos mil noventa y cinco de Tomo XXIV correspondiente al mes de agosto de dos mil seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido literal es el siguiente:-----

“SANA CRITICA. SU CONCEPTO.- *Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que llevan a correcta apreciación de los hechos.*

--- Así, con relación al desahogo de la pruebas presuncional, es de puntualizar que, siguiendo la línea de pensamiento expresada en los párrafos precedentes, en el ámbito jurisdiccional y administrativo es la consecuencia lógica y natural de hechos conocidos y acreditados al momento de realizar la inferencia respectiva.-----

--- Luego, dicho medio de convicción no goza de una entidad probatoria, ello, toda vez que su existencia depende de los datos objetivos aportados al proceso mediante los cuales se realiza la apreciación de las actuaciones que obren agregadas al expediente de que se trate, así como la apreciación lógica de las leyes de la razón para desprender de ellos hechos desconocidos. -----

--- Por lo tanto, debido a tan especial naturaleza, es evidente que el descargo de la prueba presuncional no ocurre sino al momento mismo en que la autoridad resuelve el asunto sometido a su conocimiento, pues la valoración de las actuaciones realizadas durante la secuela, así como la apreciación de análisis deductivo que resulta de las diversas pruebas desahogadas en el proceso, constituye la esencia de la actividad resolutoria desplegada en la etapa conclusiva del asunto.-----

--- En ese contexto, aplicando las anteriores reflexiones al ámbito del régimen local de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, es evidente que aun cuando el Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la materia no prevé un sistema para el desahogo de la probanza en cuestión, es claro que ejecución de la misma ocurre al momento mismo en que los Órganos de Control Interno resuelven en lo principal el asunto de que se trate, estimando

cuales presunciones legales o humanas se actualizan en el caso concreto, ello acorde al principio de comunidad en la prueba. -----

--- Sirve de apoyo al razonamiento anterior la tesis XX. 305 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, correspondiente a la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XV, Enero de 1995, página 291, que a continuación se transcribe:-----

PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS.

Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos.

--- Según la naturaleza de los hechos y el enlace lógico jurídico y natural que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciándola en recta conciencia, la misma no favorece a la incoada **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, por el contrario, acreditan que no **presentó** su Declaración de Intereses correspondiente al año dos mil quince, hasta **el día primero de septiembre de dos mil quince**, de acuerdo a lo señalado en el oficio **CG/DGAJR/DSP/26/2016 de fecha seis de enero de dos mil dieciséis**, signado por el licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal, así como, la copia simple del acuse de recibo electrónico de la Declaración de Intereses de la hoy incoada de fecha primero de septiembre de dos mil quince; **es decir después del mes de agosto de ese año, por lo que se presume resulta extemporánea.** -----

--- Asimismo, a través de dicho documento el referido servidor público remitió el listado de servidores públicos de la Entidad que se encuentran obligados a presentar Declaración de Intereses en el año dos mil quince, en el que está incluida la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**. Siendo el caso, que mediante el diverso **CG/DGAJR/DSP/26/2016 de seis de enero de dos mil dieciséis**, el licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General del Distrito Federal, informó que de la búsqueda realizada en el Sistema de Declaración de Intereses se obtuvo registro de que la servidora pública **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, presentó su Declaración de Intereses correspondiente al año dos mil quince, el día primero de septiembre del año dos mil quince, lo que se encuentra corroborado con la copia simple del acuse de recibo electrónico de la Declaración de Intereses de la hoy incoada de fecha primero de septiembre de dos mil quince. -----

--- No es óbice para esta Autoridad referir que por lo que hace a la fracción XIX del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ésta no se actualiza, ya que la normativa de la cual deriva la obligación de los servidores públicos sujetos a presentar la Declaración de Intereses que nos ocupa, esto es el ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES, y en específico los LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES A CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y HOMÓLOGOS QUE SE SEÑALAN, no corresponden a una instrucción, requerimiento o

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

resolución de la Contraloría General del Distrito Federal que se haya realizado de manera individual a la ciudadana hoy incoada. -----

--- **SEXTO.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.-** Una vez analizadas las constancias que integran el expediente que se resuelve y toda vez que ha quedado acreditada la plena responsabilidad de la servidora pública en la infracción al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su fracción XXII, se procede a la individualización de la sanción que le corresponde, atendiendo para ello las fracciones I a VII, que prevé el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, como a continuación se realiza: -----

--- **a)** La fracción I del precepto en análisis, trata sobre la responsabilidad en que incurrió la servidora pública implicada y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan en cualquier forma las disposiciones de la ley de la materia o las que se dicten con base a ella. Sobre el particular cabe señalar que del análisis a las constancias que integran el presente disciplinario se advierte no se trató de una conducta grave, lo que sin duda favorece los intereses de la incoada, sin embargo, aún ante la falta de gravedad de la irregularidad en que incurrió la servidora pública se hace necesario suprimir dichas prácticas, de manera específica en el caso en particular, que la servidora pública cumpla con las obligaciones que le imponen las normas que regulan su función como Soporte Administrativo "C" adscrita al Hospital General de Ticomán de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.-----

--- **b)** En cuanto a la fracción II relacionada con las circunstancias socioeconómicas de la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, debe tomarse en cuenta que se trata de una persona de XXX años de edad y con instrucción educativa XXXXX, lo anterior de conformidad con la declaración de la ciudadana de mérito contenida en el acta administrativa instrumentada con motivo del desahogo de su Audiencia de Ley, que se llevó a cabo el veintidós de febrero del presente año, visible a fojas 035 a 036 del expediente que se resuelve; a la cual se le concede valor probatorio de indicio en términos de lo dispuesto por el artículo 285 párrafo primero del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así y por lo que hace al sueldo mensual neto que devengaba en la época de los hechos que se atribuyen, éste ascendía a la cantidad de \$11,956.83 (once mil novecientos cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.); de acuerdo con el oficio CRH/9723/2015 de dos de septiembre de dos mil quince, signado por el C.P. Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, documental valorada en términos de lo dispuesto por los artículos 280 y 281 del Código Federal de Procedimientos Penales de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. De lo cual se desprenden los datos antes señalados consistentes en la edad, instrucción educativa y sueldo mensual aproximado que devengaba en la época de los hechos irregulares que se le atribuyen; circunstancias que permiten a esta autoridad afirmar que la involucrada estaba en aptitud de conocer y comprender sus obligaciones como servidora pública, así como de entender las consecuencias de su actuar irregular. -----

--- **c)** Respecto de la fracción III, en lo concerniente al nivel jerárquico, lo antecedentes y las condiciones de la infractora, como ya se ha señalado la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, funge como Soporte Administrativo "C" adscrita Hospital General de Ticomán dependiente de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, situación que se acredita con la certificada del oficio CRH/9723/2015, de fecha dos de septiembre del dos mil quince, a través del cual el Contador Público Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de Servicios de Salud Pública informó a esta Contraloría Interna que dicha ciudadana ocupa un puesto de Soporte Administrativo "C" adscrita al

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

Hospital General de Ticoman de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, dentro de dicho Organismo Público Descentralizado, así como la copia certificada de la Constancia Global de Personal Eventual de fecha nueve de julio del mismo año, lote JGL2215, correspondiente a la quincena 22/15, vigencia del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, la cual se encuentra signada por el Director de Administración y Finanzas, el Coordinador de Recursos Humanos y el Subdirector de Movimientos de Personal y en la que consta el puesto que ocupa la hoy incoada; documentales públicas que gozan de valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 280, 281 y 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en términos del artículo 45 de este último ordenamiento, con la que se acredita que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, fungía en la época de los hechos irregulares que se le imputan como Soporte Administrativo "C" adscrita al Hospital General de Ticoman de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. -----

--- Puesto de Soporte Administrativo "C" que resulta en un cargo homólogo por ingresos o contraprestaciones al puesto de estructura en la Administración Pública del Distrito Federal, denominado "Enlace" cuyo sueldo mensual en su nivel más bajo, eso es, Enlace "A" tiene un sueldo mensual neto de \$10,755.92 (diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.) de acuerdo a los sueldos publicados por la Oficialía Mayor en su página electrónica oficial, consulta realizada por esta Interna el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, a través de la liga <http://www.om.df.gob.mx/>, ícono "nómina del Gobierno del Distrito Federal" en donde se encuentra un apartado denominado Remuneraciones al personal del Gobierno del Distrito Federal, Sueldo Mensual Bruto y Neto por Puesto, del Sector Central; lo anterior toda vez que de acuerdo al oficio CRH/9723/2015 de dos de septiembre de dos mil quince, el C.P. Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal informó que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** tenía en el momento de los hechos una percepción mensual neta de \$11,956.83 (once mil novecientos cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.). -----

--- Por lo que hace a los antecedentes de la infractora, a foja 033 obra el oficio CG/DGAJR/DSP/603/2016, de fecha cinco de febrero del dos mil dieciséis suscrito por el Licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General, a través del cual informó a esta Contraloría Interna que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, a la fecha no cuenta con registro de antecedente de sanción, por lo que no se puede afirmar que sea reincidente en incumplimiento a alguna de las obligaciones previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- Respecto de las condiciones de la infractora, debe decirse, que de autos en el expediente en que se actúa, no se observa que existan circunstancias que la excluyan de responsabilidad, ya que por el contrario de dichos autos se aprecia que contaba con la experiencia y capacidad necesaria, así como con los medios para cumplir cabalmente con las obligaciones que como servidora pública tenía encomendadas. -----

--- d) En cuanto a la fracción IV del precepto legal que nos ocupa, esta señala las condiciones exteriores y los medios de ejecución, al respecto cabe señalar que de autos no se advierte la existencia de ninguna condición externa que hubiere influido en el ánimo de la servidora pública la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, para realizar la conducta irregular que se le atribuyó en el Considerando Segundo; en cuanto a los medios de ejecución, se observa que estos se dan al momento de fungir como Soporte Administrativo "C" adscrita al Hospital General de Ticoman de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal; el puesto que ostenta la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**,

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

lo que se acredita con la certificada del oficio CRH/9723/2015, de fecha dos de septiembre del dos mil quince, a través del cual el Contador Público Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de Servicios de Salud Pública informó a esta Contraloría Interna que dicha ciudadana ocupa un puesto de Soporte Administrativo "C" adscrita al Hospital General de Ticomán, dentro de dicho Organismo Público Descentralizado, así como la copia certificada de la Constancia Global de Personal Eventual de fecha nueve de julio del mismo año, lote JGL2215, correspondiente a la quincena 22/15, vigencia del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, la cual se encuentra signada por el Director de Administración y Finanzas, el Coordinador de Recursos Humanos y el Subdirector de Movimientos de Personal y en la que consta el puesto que ocupa la hoy incoada. -----

--- Puesto de Soporte Administrativo "C" que resulta en un cargo homólogo por ingresos o contraprestaciones al puesto de estructura en la Administración Pública del Distrito Federal, denominado "Enlace" cuyo sueldo mensual en su nivel más bajo, eso es, Enlace "A" tiene un sueldo mensual neto de \$10,755.92 (diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.) de acuerdo a los sueldos publicados por la Oficialía Mayor en su página electrónica oficial, consulta realizada por esta Interna el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, a través de la liga <http://www.om.df.gob.mx/>, ícono "nómina del Gobierno del Distrito Federal" en donde se encuentra un apartado denominado Remuneraciones al personal del Gobierno del Distrito Federal, Sueldo Mensual Bruto y Neto por Puesto, del Sector Central; lo anterior toda vez que de acuerdo al oficio CRH/9723/2015 de dos de septiembre de dos mil quince, el C.P. Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal informó que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** tenía en el momento de los hechos una percepción mensual neta de \$11,956.83 (once mil novecientos cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.). -----

--- Por lo que al ostentar dicho **Homólogo en sueldo o contraprestaciones al referido puesto de estructura**, conforme a la Política Quinta del *ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES* publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; tenía la obligación de declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos; lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico (**Declaración de Intereses**), conforme a lo señalado por la Política Octava del cuerpo legal invocado, es decir, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que determine la Contraloría General del Distrito Federal en correlación con el artículo Tercero Transitorio del Acuerdo en comento y Segundo Transitorio de los Lineamientos aludidos que disponen que dicha declaración de intereses prevista en la citada Política Quinta, en primera ocasión debió presentarse en el mes de agosto de 2015; obligaciones que inobservó el incoado en razón que omitió presentar su Declaración de Intereses en el mes aludido, como se acreditó con oficio signado por el Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, por el cual informó respecto la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** que no se encontró registro alguno que acredite haber presentado su declaración de intereses al día once de noviembre del dos mil quince,

tal como quedó acreditado en el Considerando Quinto, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias. -----

--- e) En cuanto a la fracción V, respecto a la antigüedad en el servicio público de la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, debe decirse que la implicada mencionó durante el desahogo de la audiencia de ley que se llevó a cabo el veintidós diecinueve de febrero del presente año señalo: -----

“... ”

--- **PRIMERA.-** QUE DIGA LA COMPARECIENTE, DURANTE QUE PERÍODO HA OCUPADO EL PUESTO DE SOPORTE ADMINISTRATIVO “C”, EN EL HOSPITAL GENERAL DE TICOMÁN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. -----

--- **RESPUESTA:** DE DOS MIL DOCE A LA FECHA. -----

“... ”

--- Es decir, se aprecia que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** cuenta con **XXXXX** laborando en la entidad con el puesto de Soporte Administrativo “C” que resulta ser un cargo homólogo por ingresos o contraprestaciones al puesto de estructura en la Administración Pública del Distrito Federal, denominado “Enlace”.-----

--- f) La fracción VI, respecto a la reincidencia de la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, como servidora pública en el incumplimiento de las obligaciones, al respecto debe decirse que a foja 050 obra el oficio CG/DGAJR/DSP/603/2016, de fecha cinco de febrero del dos mil dieciséis suscrito por el Licenciado Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General, a través del cual informó a esta Contraloría Interna que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, a la fecha no cuenta con registro de antecedente de sanción, por lo que no puede ser considerada como reincidente en incumplimiento de alguna obligación del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- g) Finalmente, la fracción VII del artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, relativa al monto del daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones es menester señalar que del análisis a los autos del expediente que se resuelve la conducta realizada por la **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, no implicó daño económico o perjuicio al patrimonio de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. -----

--- Así, una vez analizados los elementos establecidos en el artículo 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se procede a fijar la sanción aplicable la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, tomando en consideración las circunstancias particulares que se dieron en el asunto que nos ocupa. -----

--- Por ello, conforme al artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamenta las sanciones aplicables a las faltas administrativas, las cuales consistirán en apercibimiento privado o público, amonestación privada o pública, suspensión, sanción económica, destitución del puesto e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. -----

--- En ese sentido, para determinar el tipo de sanción a imponer, la autoridad en ejercicio de sus atribuciones legales para determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, si las infracciones a las obligaciones de los servidores públicos resultan graves o no, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico,

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones y el monto del daño o beneficio económico causado o el beneficio que se haya obtenido, a fin de que sea acorde a la magnitud del reproche y que corresponda a la gravedad e importancia de la falta cometida, para que tenga el alcance persuasivo necesario y, a su vez, evitar que en su extremo, sea excesiva, tal y como así ha quedado definido en la siguiente jurisprudencia: -----

“RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS. AL RESOLVER EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LA AUTORIDAD DEBE BUSCAR EL EQUILIBRIO ENTRE LA CONDUCTA INFRACTORA Y LA SANCIÓN A IMPONER. De conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos deberán establecer sanciones de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados con su conducta. De esta manera, por dispositivo constitucional, el primer parámetro para graduar la imposición de una sanción administrativa por la responsabilidad administrativa de un servidor público, es el beneficio obtenido o el daño patrimonial ocasionado con motivo de su acción u omisión. Por su parte, el numeral 54 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (de contenido semejante al precepto 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil dos), dispone que las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta, además del señalado con antelación, los siguientes elementos:

- I. La gravedad de la responsabilidad y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones de dicha ley;*
- II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;*
- III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;*
- IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;*
- V. La antigüedad en el servicio; y,*
- VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.*

Por tanto, la autoridad administrativa debe buscar un equilibrio entre la conducta desplegada y la sanción que imponga, para que ésta no resulte inequitativa.

--- En ese sentido, es de tomarse en cuenta en que la conducta en que incurrió la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, consistente en que el puesto que ostenta como Soporte Administrativo “C” conforme a la certificada del oficio CRH/9723/2015, de fecha dos de septiembre del dos mil quince, a través del cual el Contador Público Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de Servicios de Salud Pública informó a esta Contraloría Interna que dicha ciudadana ocupa un puesto de Soporte Administrativo “C” adscrita al Hospital General Ticoman, dentro de dicho Organismo Público Descentralizado, así como la copia certificada de la Constancia Global de Personal Eventual de fecha nueve de julio del mismo año, lote JGL2215, correspondiente a la quincena 22/15, vigencia del primero de octubre al treinta y uno de diciembre del dos mil quince, la cual se encuentra signada por el Director de Administración y Finanzas, el Coordinador de Recursos Humanos y el Subdirector de Movimientos de Personal y en la que consta el puesto que ocupa la hoy incoada. -----

--- Cargo de Soporte Administrativo C que resulta en un cargo homólogo por ingresos o contraprestaciones al puesto de estructura en la Administración Pública del Distrito Federal, denominado “Enlace” cuyo sueldo mensual en su nivel más bajo, eso es, Enlace “A” tiene un sueldo mensual neto de \$10,755.92 (diez mil setecientos cincuenta y cinco pesos 92/100 M.N.) de acuerdo a los sueldos publicados por la Oficialía Mayor en su página electrónica oficial, consulta realizada por esta Interna el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, a través de la liga <http://www.om.df.gob.mx/>, ícono “nómina del Gobierno del Distrito Federal” en donde se encuentra un apartado denominado Remuneraciones al personal del Gobierno del Distrito Federal, Sueldo Mensual Bruto y Neto por



EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

Puesto, del Sector Central; lo anterior toda vez que de acuerdo al oficio CRH/9723/2015 de dos de septiembre de dos mil quince, el C.P. Adalberto Rivera Rodríguez, Coordinador de Recursos Humanos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal informó que la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** tenía en el momento de los hechos una percepción mensual neta de \$11,956.83 (once mil novecientos cincuenta y seis pesos 83/100 M.N.). -----

--- Por lo que al ostentar dicho **cargo Homologo en sueldo o contraprestaciones al de estructura antes referido**, conforme a la Política Quinta del *ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN LAS POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL QUE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES* publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de mayo de 2015; tenía la obligación de declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales con personas físicas o morales, de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios, incluyendo los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser favorecidos, beneficiados, adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones que les confieren los ordenamientos jurídicos y administrativos; lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico (**Declaración de Intereses**), conforme a lo señalado por la Política Octava del cuerpo legal invocado, es decir, conforme a los formatos, plazos, mecanismos y demás formalidades que determine la Contraloría General del Distrito Federal en correlación con el artículo Tercero Transitorio del Acuerdo en comento y Segundo Transitorio de los Lineamientos aludidos que disponen que dicha declaración de intereses prevista en la citada Política Quinta, en primera ocasión debió presentarse en el mes de agosto de 2015; obligaciones que inobservó la incoada en razón que omitió presentar su Declaración de Intereses en el mes aludido, como se acreditó con oficio signado por el Lic. Miguel Ángel Morales Herrera, Director de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General del Distrito Federal, por el cual informó respecto la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, que no se encontró registro alguno que acredite haber presentado su declaración de intereses al día once de noviembre del dos mil quince, siendo una conducta que no se considera grave, más con su conducta contraviene el principio de legalidad que todo servidor público debe observar, como lo prevé el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya finalidad se centra en que los servidores públicos se conduzcan cumpliendo a cabalidad con la ley en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. -----

--- De esta forma, es claro que en un correcto equilibrio entre la falta administrativa acreditada a la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, quien cometió una conducta considerada no grave y la sanción a imponer, debe ponderarse dicha situación y su afectación al servicio público. -----

--- Por tal consideración, se estima que la sanción que se le imponga debe de ser superior a una amonestación pública, asimismo, no debe ser superior a una inhabilitación. -----

--- En tal virtud y considerando que la conducta realizada por la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS** incumplió con la obligación contemplada en la fracción XXII del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se estima procedente imponer la sanción administrativa consistente en una **AMONESTACIÓN PRIVADA**, en términos de lo dispuesto 53 fracción II y 56 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el numeral 75 de dicho ordenamiento. -----

--- Misma que no resulta insuficiente ni excesiva para evitar que se susciten en el futuro conductas como la aquí analizada, con la cual la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS incumplió una disposición jurídica relacionada con el servicio público.** -----

--- Por lo anteriormente expuesto y fundado; es de acordarse y se; -----

----- **RESUELVE** -----

--- **PRIMERO.** Esta Contraloría Interna en Servicios de Salud Pública, es competente para conocer, iniciar, tramitar, y resolver el presente procedimiento administrativo disciplinario, en los términos expuestos en el considerando primero de esta resolución. -----

--- **SEGUNDO.** La ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS, ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE** por infringir la exigencia prevista en el artículo 47, fracción XXII, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. -----

--- **TERCERO.** Se impone a la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, una sanción administrativa consistente en una **AMONESTACIÓN PRIVADA**, en términos de lo dispuesto 53 fracción II y 56 fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en relación con el numeral 75 de dicho ordenamiento. -----

--- **CUARTO.** Notifíquese la presente resolución con firma autógrafa a la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, para los efectos legales a que haya lugar.-----

--- **QUINTO.** Hágase del conocimiento a la ciudadana **EMILIA BAUTISTA DE JESÚS**, que en pleno respeto a sus Derechos Humanos y garantías, puede interponer en contra de la presente resolución el medio de defensa previsto en la Ley de la Materia, es decir, que la presente resolución puede ser impugnada dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la misma, a través del recurso de revocación ante esta Contraloría Interna, o bien, mediante Juicio de Nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, esto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.-----

--- **SEXTO.** Remítase testimonio de la presente resolución al Director de Situación Patrimonial de la Contraloría General, para los efectos legales conducentes en el ámbito de su respectiva competencia. --

--- **SÉPTIMO.** Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales denominado "**EXPEDIENTES RELATIVOS A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS DE REVOCACIÓN, SUSTANCIADOS POR LA CONTRALORÍA INTERNA DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL**", el cual tiene su fundamento en los artículos 6 párrafo primero y segundo, inciso A fracción II; 14 primer párrafo; 16 párrafo segundo; 108 párrafos primero y último; 109 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 2, 3 fracción IV, 47 fracciones I y IV, 57, 60, 61, 62, 64 fracción I, 65, 66, 68, 71, 73 párrafo primero, 91 y 93 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; artículo 34 fracciones V, VII, VIII, XXVI y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública

EXPEDIENTE CI/SUD/D/141/2015

del Distrito Federal; artículos 7, 8, 9, 13, 14, 15, 40 y 42 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; artículos 4 fracciones II, VII, VIII, XV, XVIII, XIX, 10, 12 fracciones V y VI, 36, 38 fracciones I y IV, 39, 44, 89, 91 y 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; artículos 1, 3 fracción IX, 30 fracciones VI y VII, 31 al 40 de la Ley de Archivos del Distrito Federal; Código Federal de Procedimientos Penales; artículos 1, 7 fracción XIV, 28 fracciones III, y IV, 105 fracciones I, VII, VIII, IX y XVII, 105-A fracciones I, II, III, IX y XIII, 105-B fracciones I y II, 110 fracciones II, III, VIII, XIII, XVIII, XXIII, XXVIII y XLIII; 110 A fracciones II, III, VIII, IX, XII, XV, XX y XXV; 110 B fracciones I, IX, XII y XIII; 110 C fracciones I, III, VI y XXIV; 113 fracciones II, X, XI, XII, XVI, XXII, XXIII, XXIV y XXV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; numerales 5, 10 y 11 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; artículo 15 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y **cuya finalidad** es la formación, integración, sustanciación y resolución de los expedientes relativos a quejas y denuncias, procedimientos administrativos disciplinarios, procedimientos administrativos de responsabilidad y recursos de revocación que conoce la Contraloría Interna. El uso de los datos personales que se recaban es exclusivamente para la identificación y ubicación de las personas involucradas y/o interesadas en conocer los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para la Investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, para la sustanciación de recursos de revisión, denuncias y procedimientos para determinar el probable incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización, a los Órganos Jurisdiccionales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Datos que no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable de los datos personales es el Maestro Luis Carlos Arroyo Robles, Contralor Interno en Servicios de Salud Pública del Distrito Federal; la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es en la Oficina de Información Pública de la Contraloría General, ubicada en Av. Tlaxcoaque # 8, Edificio Juana de Arco, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06090, Ciudad de México. El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono: 5636-4636; correo electrónico: datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx. -----

OCTAVO. Cumplimentado en sus términos, archívese el expediente de cuenta como asunto total y definitivamente concluido y háganse las anotaciones en los registros correspondientes.-----

ASÍ LO RESOLVIÓ Y FIRMA EL MAESTRO LUIS CARLOS ARROYO ROBLES, CONTRALOR INTERNO EN SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. -----

NNLS/jffo

